



Hble. Sr. Oriol Junqueras i Vies
Vicepresidente y Consejero de Economía y Hacienda
Generalitat de Catalunya

Madrid, a 1 de agosto de 2016

Estimado Vicepresidente,

El pasado 6 de abril se remitió comunicación por parte del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, según la cual, se activaban para la comunidad las medidas coercitivas previstas en el artículo 25.1.a) de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, relativas a la aprobación de la no disponibilidad de créditos y a la retención de los mismos que garantizara el cumplimiento del objetivo establecido.

En el Plan de ajuste que se acordó con la comunidad para la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico del ejercicio 2016 se concretaron dichos acuerdos de no disponibilidad, así como el conjunto de medidas y escenarios relativos a la evolución financiera del ejercicio 2016 compatibles con el objetivo de estabilidad del -0,7% incorporado en el Programa de Estabilidad comunicado a las instituciones europeas.

En todo caso, resulta imprescindible llevar a cabo un adecuado seguimiento del cumplimiento del plan de ajuste acordado así como velar por la correcta aplicación y suficiencia de los acuerdos de no disponibilidad adoptados en cumplimiento del citado artículo 25 de la LOEPSF. A este respecto, y de acuerdo con los últimos datos disponibles en relación a la ejecución presupuestaria de tu comunidad observamos con preocupación la existencia de posibles riesgos y desviaciones en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del presente ejercicio, tal y como hemos tenido ocasión de analizar en la videoconferencia que se ha mantenido esta misma semana, y por ende del escenario contemplado en el plan de ajuste.

Dichos riesgos se concentran fundamentalmente, por lo que se refiere al presupuesto de ingresos, en el comportamiento que finalmente pueda registrar a fin de ejercicio la recaudación derivada del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, respecto a los cuales nos habéis transmitido vuestra previsión de mejora en el segundo semestre del año. Por lo que respecta al presupuesto de gastos, observamos con preocupación la evolución registrada en materia de gastos de personal, sin perjuicio de las previsiones comunicadas en relación a devoluciones de parte de la paga extra del ejercicio 2012, y especialmente en relación a



los gastos corrientes en bienes y servicios, especialmente en aquellas partidas relativas al gasto sanitario, aun considerando el efecto que nos habéis trasladado en relación a la actualización en 2015 de las tarifas de los conciertos y la estricta supervisión del capítulo realizada desde vuestra consejería. En relación a eventuales riesgos en materia de resolución de sentencias, quiero agradecerle, sin perjuicio de que pueda ser complementada posteriormente, la información transmitida al respecto.

En todo caso, esta apreciación sobre la existencia de riesgos y desviaciones se contempla igualmente en el informe anual elaborado por la AIReF sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública así como sobre la regla de gasto del ejercicio en curso al que se refiere el artículo 17 de la Ley 6/2013 de 14 de noviembre, de creación de la AIReF.

Atendiendo al momento del ejercicio presupuestario en el que nos encontramos resulta de especial trascendencia la activación de las medidas necesarias para procurar el cumplimiento del objetivo de estabilidad, del plan de ajuste y de los efectos de las medidas coercitivas aplicadas. A modo de ejemplo, y con el fin de procurar el adecuado cumplimiento de la senda de consolidación fiscal y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Comisión Europea, el Estado, adicionalmente a la instrumentación de un Acuerdo de no disponibilidad de 2.000 millones de euros, ha procedido a adelantar al mes de julio el cierre del presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias.

A este respecto, la Comunidad deberá comunicar y concretar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, e incorporar a su plan de ajuste, las medidas adicionales que va a adoptar que permitan corregir cualquier posible desviación del cumplimiento del objetivo de estabilidad.

En cualquier caso, y con independencia de lo señalado en el párrafo anterior, se requiere la remisión de información específica antes del próximo 5 de septiembre sobre las siguientes cuestiones:

- Líneas fundamentales de la orden de cierre del ejercicio 2016 prevista por la comunidad, sobre la cual ya hemos tenido ocasión de comentar en la videoconferencia su necesaria conexión con los efectos de la prórroga de presupuestos vigente para este año, con referencia a la fecha prevista de publicación y a los plazos límite en la asunción de compromisos de gasto adicionales, remitiendo información sobre los efectos estimados de dicha orden y la evaluación mensual de dichos efectos desde su adopción, conforme al modelo A24 disponible en el envío de los cuestionarios de la plataforma CIMCA.
- En la medida en que el artículo 25 de la LOEPSF anteriormente citado establece limitaciones al incremento del gasto registrado en cuentas auxiliares, a cuyo efecto



dicha información será objeto de un seguimiento específico, se deberá remitir los informes a los que se refiere el artículo 10 y 12 de la ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica, así como la información adicional, especialmente en relación a la Administración General, que a estos efectos se solicite específicamente por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

- Informe sobre la valoración y variables consideradas en relación al comportamiento esperado en el segundo semestre de 2016 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
- Relación de las actuaciones y medidas adoptadas o previstas en relación al control del gasto de personal y del gasto corriente en bienes y servicios, a fin de procurar el cumplimiento de las previsiones del plan de ajuste, o en su defecto remisión de las actuaciones adicionales a acometer para compensar eventuales desviaciones.
- Información específica sobre los procesos judiciales actualmente en vigor que pudieran determinar en el ejercicio 2016 algún impacto en términos de mayor o menor necesidad de financiación, y en concreto en relación al recurso interpuesto por Agbar.

Por último, quiero trasladarte la importancia en la adopción de las decisiones necesarias que permitan el cumplimiento de los compromisos asumidos a este respecto, así como las implicaciones que su incumplimiento determina para cada una de las Administraciones Públicas, en virtud del principio de responsabilidad regulado en el artículo 8 de la LOEPSF, conforme al cual cada Administración Pública asumirá, en la parte que le sea imputable, las responsabilidades derivadas del incumplimiento de los compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa europea o las disposiciones contenidas en tratados o convenios internacionales, y que ha sido objeto de desarrollo conforme a lo previsto en el Real Decreto 515/2013 por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la UE.

Sin otro particular, quedamos a la espera de la información indicada, con el convencimiento de que la comunidad llevará a cabo los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el ejercicio corriente.

Atentamente,

Antonio Beteta Barreda